

MODERNIDAD Y POBREZA

Es indudable que los objetivos de la política económica del actual régimen, el crecimiento y la estabilidad, tendrán poco significado para el desarrollo si no se refleja en el bienestar colectivo.

Lo económico tiene relevancia solo en cuanto ataca los obstáculos materiales que impiden un mayor avance en lo social.

La creación de condiciones económicas propicias, es requisito, entonces, para que el bienestar alcanzado sea perdurable.

Por tanto, los objetivos de crecimiento y estabilidad, deben ir acompañados de un propósito fundamental como lo es el avanzar hacia una mayor justicia social.

Esto sólo se logrará mediante el incremento del empleo, el aumento del poder adquisitivo de los salarios, la erradicación de la pobreza extrema y en general, la mejor distribución del ingreso y de las oportunidades.

Sin embargo, hasta ahora estos objetivos son poco optimistas y bondadosos. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios entre mil novecientos ochenta y dos mil novecientos ochenta y nueve fluctúa entre el cincuenta por ciento y el setenta por ciento (según se trata de salarios industriales o mínimos).

El desempleo urbano se ha incrementado para el mismo periodo en un cuarenta y cinco por ciento, lo que ha provocado que familias enteras busquen ingresos complementarios o absolutos en actividades informales tales como el ambulante.

Esto ha provocado que se ensanche el núcleo de población que vive en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Dicha franja de la pobreza en México abarcó para mil novecientos ochenta y ocho a más de la mitad de los habitantes del país.

El concepto de pobreza extrema engloba —según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo— “aquéllos hogares que tienen un ingreso total de magnitud tan ínfima, que aun cuando fuera destinado en su totalidad a la alimentación, no les permitiría satisfacer sus requerimientos nutricionales”.

El problema se vuelve más complejo si consideramos que desde mil novecientos ochenta y cinco, un millón de jóvenes mexicanos llega cada año a la edad de trabajar.

Si se pretende que vivan productivamente, deberán crearse en los próximos veinte años, veinte millones de empleos más, aparte de los ya existentes.

Así pues, no habrá Estado justo o sistema político capaz de paliar los problemas sociales si no hay empleos permanentes. Si bien el empleo no se ha desplomado a niveles más drásticos, lo cierto es que la crisis económica de los últimos años, ha dejado sin oportunidad de encontrar trabajo por primera vez a los miles de jóvenes que llegan al mercado laboral.

Durante los ochentas, aquel se ha dado en llamar —La Década Pérdida”, índices como el de la mortalidad infantil se incrementó, y volviendo a aparecer brotes de tuberculosis, sarampión y otras enfermedades anteriormente erradicadas por la acción estatal.

En tal contexto, para muchos críticos del sistema, la formulación de programas como el Programa Nacional de Solidaridad, cabe perfectamente dentro de la lógica neoliberal del salinismo.

Si pensamos e el esquema recomendado por el Banco Mundial en apoyo a políticas de corte neoliberal, tales como: reducción de déficit fiscal, liberación de precios, contención de salarios, eliminación de barreras arancelarias en el sector externo, etc., es evidente que las políticas de alivio de la pobreza quedan subsumidas a las del incremento de la productividad.

El esquema recomendado por el Banco Mundial era el siguiente; Separará la política

del incremento de la productividad de las que de alivio de la pobreza.

Esto significa que la política social pasa a un segundo plano, privilegiando a toda costa el objetivo de la estabilidad para que un posterior crecimiento tuviera efectos compensatorios sobre la totalidad de la población. En otros términos el actual régimen busca lograr el consenso minado, apelando a un futuro más prometedor producto de su actual política de ajuste, sin descuidar en el presente, fácilmente podría derivar en un proceso de ingobernabilidad como los suscitados recientemente en algunos países de Latinoamérica.

En anteriores periodos de crecimiento (como el llamado "Desarrollo Estabilizador"), el esperado derrame del bienestar en forma de cascada tuvo efectos "negativos". Lo que se produjo fue una mayor concentración del ingreso en beneficio de un reducido sector de la población.

Por ello, el actual programa de Solidaridad real de funcionar como instrumento en el combate contra la pobreza, ya que por otra parte se presenta un férreo control de los salarios permitiendo una liberación en los precios.

Armando Bartra, nos dice que "el actual gobierno mexicano ha creado un programa asistencialista para socorrer a la población a la que empobrece cada día más con su política económica..."

Sin embargo, desde la perspectiva gubernamental, dada la situación crítica en la que se encuentra la Nación, esta es la única salida viable para profundizar las medidas de un cambio estructural. El actual régimen inside en contener los salarios, pues de otra forma se llegaría a un incremento de los índices inflacionarios seguido por una crisis recurrente de inestabilidad.

En su segundo informe de gobierno Salinas de Gortari califica a la inflación como "el mayor enemigo de la población" contra la cual no queda más que sumar esfuerzos y sobre esa base recuperar el crecimiento.

Sin embargo, los rezagos sociales son los que se acrecentan a pesar de las grandes inversiones realizadas con recursos de Solidaridad en Chalco y otras regiones.

Dichos rezagos pueden terminar minando las bases mismas del acuerdo social sobre la que descansa la operación de las instituciones e implementación de la política económica.

Dicha situación encierra una amenaza de desestabilización política que no conviene a nadie ya que significaría alentar la fuga de capitales, cancelar los procesos de inversión y la tan anhelada inversión extranjera, entre otros muchos factores.

La modernización económica tal como ha quedado planteada con sus rezagos sociales y el ensanchamiento de la línea de pobreza aunada a una perspectiva de viejos vicios en la estructura corporativa del Estado ha llevado a amplios sectores de la población a desconfiar del sistema político.

Esto ha quedado en evidencia en los altos índices de abstencionismo experimentados en las pasadas elecciones locales.

Es innegable que el deterioro del nivel de vida de los mexicanos, demanda una creciente necesidad de participación política.

Ello implica, en suma una mayor democracia que persiga, como mencionamos en un principio, una mejor distribución del ingreso y de las oportunidades en nuestro país.

*Eduardo Zamarrón y
Rodrigo Gutiérrez
6 de mayo 1991*